

## CONVERGENCIA Y EMPLEO

MANUEL LAGO PEÑAS

Sindicato Nacional de Comisiones Obreras (SN de CC.OO.)

*Recibido: 5 mayo 2000*

*Aceptado: 15 junio 2000*

La economía gallega entra en el año 2000 en plena fase expansiva de un ciclo que se inicia en el cuarto trimestre de 1993. El crecimiento del PIB en un 4% en el último trimestre de 1999 señala, además, la más que probable continuidad de este ciclo alcista que ya dura 25 trimestres.

Esta fase de intenso crecimiento se da, además, en un entorno macroeconómico de estabilidad, en especial, de las variables monetarias. Estamos, entonces, ante una coyuntura favorable y compartida con el resto de España y también con casi todos los países de la Unión Europea.

En este escenario, el desafío de la sociedad gallega es el de transformar esta situación en un cambio estructural de nuestro sistema productivo, cambio que ha de tener como elemento central la estrategia de la convergencia.

La convergencia es la palabra clave para la próxima década, en especial, durante el período 2000-2006, plazo del actual marco financiero comunitario que presenta un futuro incierto después de esa fecha para las políticas de cohesión territorial, tanto en los recursos disponibles como en su destino.

Galicia tiene que aprovechar este período para alcanzar, en términos de renta, la convergencia con el valor medio de España y darle un impulso para acercarse al de la Unión Europea.

Porque, a pesar del intenso crecimiento, lo cierto es que el indicador básico de convergencia —el PIB por habitante— sigue en 1999 prácticamente estancado: equivale al 84% del valor medio de España y está 32 puntos por debajo del comunitario.

Y esto sucede a pesar del peor comportamiento demográfico de Galicia, donde, al disminuir el denominador, surge un cierto proceso perverso de convergencia, de “convergencia pasiva”, por la vía de la reducción de la población.

Si no queremos resignarnos a esta vía, el único modo de alcanzar niveles de renta similares es lograr que la economía gallega crezca más rápido que la media del Estado y de la Unión Europea.

En concreto, el PIB de Galicia tendría que crecer en la próxima década al menos un 1% por encima de los valores medios de España, para avanzar hacia la convergencia. La combinación de este mayor dinamismo económico con la peor evolución demográfica nos situaría en este camino.

Es evidente que todo esto no es más que un simple juego aritmético. El problema está en definir cómo se logra este diferencial de crecimiento de la actividad

económica en Galicia para aumentar con mayor intensidad con el resto del territorio del Estado.

Como ya se sabe, cada vez existe más sincronía entre el ciclo económico de Galicia y el de España. De hecho, en la última década –excepto con la extraña excepción del año 1995– se dan cifras de crecimiento del PIB prácticamente iguales, aunque algo por debajo en Galicia para el total acumulado del período.

Por lo tanto, confiar en que de la dinámica actual de nuestra estructura económica surja este impulso hacia la convergencia es un ejercicio de puro voluntarismo. Más aún, en la estructura productiva de Galicia no destacan las ramas de actividad que están tomando una mayor importancia en el crecimiento del PIB y que explican el mayor dinamismo de Comunidades como Baleares, Canarias, Madrid o Cataluña.

Pero sí existe una respuesta a la pregunta de cómo crecer más, respuesta que no es voluntarista porque depende precisamente de quién tiene que tomar la decisión de llevarla a cabo.

Es el poder político, el Gobierno central, la Xunta de Galicia y, por qué no, la Unión Europea los que pueden y deben darle este impulso al crecimiento que posibilite la convergencia.

Más detalladamente, un programa de inversión pública del conjunto de las administraciones –compartido con el resto de las comunidades que son “objetivo número 1” –, que tenga un carácter excepcional y con dotaciones presupuestarias claramente superiores a la débil inversión ordinaria, podría generar ese mayor crecimiento de las comunidades con menor nivel de renta.

Una dotación cercana a los 200.000 millones de pesetas por año, durante el período 2000-2006, de ese fondo especial posibilitaría el necesario crecimiento de Galicia a través de una doble vía.

A corto plazo, impulsaría un mayor crecimiento gracias al aumento sensible de la demanda agregada y gracias al efecto multiplicador de la inversión pública. Pero sobre todo, se produciría ese impulso a medio y a largo plazo, porque esta inversión permitiría capitalizar la economía gallega y dotar al sistema productivo del país de una base infraestructural competitiva con la del resto del Estado.

Esta propuesta es mucho más que una simple manifestación de deseos; es, ni más ni menos, que la exigencia de que se cumplan los principios básicos de la Constitución española y de los propios tratados y normas de la Unión Europea.

El principio de la cohesión territorial de igualar los niveles de desarrollo y renta de los diferentes territorios que conforman España y la Unión Europea forma parte de estos principios básicos y, de hecho, se crearon los instrumentos específicos para este fin: el Fondo de Compensación Interterritorial, los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión.

El problema es el incumplimiento real de la obligación formal, que se concreta en una baja dotación presupuestaria y en el uso de criterios que no se corresponden con la realidad de los territorios.

He aquí una propuesta que tendría que aglutinar el conjunto de la sociedad gallega, comenzando por sus agentes institucionales, económicos y sociales: la exigencia de un plan para la cohesión territorial, de un plan para la convergencia en los terrenos del desarrollo y del bienestar social, con el objetivo de que Galicia alcance una renta por habitante similar a la de España y a la de la Unión Europea.

Entre los elementos de este plan tendrían que incluirse las siguientes propuestas concretas:

- La dotación anual al Fondo de Compensación Interterritorial tendría que ser efectivamente del 40% de la inversión civil nueva, sin otras limitaciones.
- La distribución de la inversión territorializada del Estado, capítulo VI de los presupuestos, también se tendría que regir por el principio de la cohesión territorial.
- Los criterios de distribución de los fondos comunitarios, estructurales y de cohesión tendrán que ser los mismos que los empleados por el Fondo de Compensación Interterritorial.

Para terminar, este mayor crecimiento económico tendrá que transformarse en un mayor crecimiento del empleo.

En los últimos cinco años el aumento del 18% del VAB sólo produjo un incremento del 2,5% del empleo, lo que muestra las dificultades de la economía gallega para generar empleo global, incluso en las fases expansivas del ciclo.

Es en el bajo nivel de ocupación –sólo 40 de cada 100 personas en edad laboral trabajan de modo efectivo– donde radica la explicación básica del diferencial de renta y desarrollo de Galicia en relación con la Unión Europea.

Este bajo nivel de ocupación y, en parte, su estructura ocupacional son causa-efecto del bajo nivel de renta relativo. Por eso el proceso de convergencia pasa necesariamente por aumentar de modo sensible la población ocupada de Galicia.